



GD-F-008 V.9

Página 1 de 10

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010090095 DEL 05/06/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

EL ASESOR QUE FUNGE COMO COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”*.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el MUNICIPIO DE GUAYATÁ – BOYACÁ es de categoría 6 y al no haber sido prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010053725 del 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia decidió DESCERTIFICAR al MUNICIPIO DE GUAYATÁ – BOYACÁ, por no haber cumplido el siguiente requisito establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015:

“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya” (aspecto “Aplicación de la metodología



establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo").

La Resolución No. SSPD 20164010053725 del 30 de septiembre de 2016, se notificó personalmente al ente territorial el 23 de noviembre de 2016, tal y como se observa en el expediente.

El Municipio de GUAYATÁ – BOYACÁ, mediante escrito radicado bajo el número 20165290837322 de 7 de diciembre de 2016, interpuso oportunamente recurso de reposición contra la resolución de descertificación.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO, DOCUMENTOS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y PRUEBAS DECRETADAS CON OCASIÓN A ESTE.

2.1 De los argumentos del recurrente

Ente territorial expuso los siguientes argumentos que fueron sintetizados por el Despacho en ejes temáticos tal y como se observa a continuación:

2.1.1 Manifestó que la Superintendencia al expedir la resolución de descertificación hizo una lectura ligera y no tuvo en cuenta los formatos a reportar, ya que por error de "tipo humano" en el REC 1A2015 se digitaron predios en el estrato 6, cuando estos no existen, comoquiera que, desde su fundación, el ente territorial ha contado con problemas para la categorización en estratos superiores al 3, lo que se verifica en su Decreto de adopción de la estratificación. Indicó que esta situación debió ser advertida por la Superintendencia al proferir el acto administrativo impugnado, ya que se registró la presencia de un nuevo estrato y fueron registrados múltiples predios en este, lo cual debió ser verificado por esta Entidad y puesto en conocimiento del ente territorial.

2.1.2 Adujo que la Secretaría de Planeación Municipal ha certificado que para la vigencia a certificar no se contaba con el estrato 6 y en este sentido al fundamentarse en hechos irreales y en un error de tipo humano, la resolución de descertificación se encuentra viciada al ir en contra de la Constitución y la Ley y afecta el principio de la prevalencia del interés general, y el de proporcionalidad

2.1.3 Alegó que en vigencias anteriores el municipio fue certificado bajo circunstancias iguales y en consecuencia no existe unidad de materia en la resolución recurrida.

2.1.4 Adujo que mediante el Acuerdo No. 026 de 28 de noviembre de 2016 se regularon los factores de subsidio y contribución para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

2.1.5 Afirmó que al ser un municipio de sexta categoría no cuenta con personal capacitado para reportar la información y por esto se presentan los errores de reporte como el presentado en el REC, no obstante, este pudo haber sido corregido si se lo hubiera advertido la Superintendencia.

2.1.6 Señaló que la decisión adoptada afecta la independencia en la administración de recursos y la prestación del servicio; señaló que dificulta el accionar administrativo, rompiendo el principio de economía y celeridad de las actuaciones, por lo que si se pondera el error presentado con la decisión adoptada, se desborda el control legal toda vez que se da prevalencia a una interpretación jurídica y no se presenta la posibilidad de corregir los errores presentados.

2.1.7 Manifestó que la Superintendencia debió buscar un medio alternativo para evitar la expedición de la resolución ya que ello conlleva a un mayor atraso en el municipio. Concluyó afirmando que esta Entidad se ha convertido en coercitiva y drástica, que en lugar de propender por un acceso a todos los habitantes a los servicios públicos, a conllevado a que estos se burocraticen más y que el servicio de agua potable sea no un derecho básico sino un lujo.

2.1.8 Arguyó que en el proceso de empalme, no recibió información clara de los problemas en los cuales se encontraba inmerso el municipio y que la Superintendencia castiga los proyectos del municipio en el sector de agua potable y saneamiento básico, que se podría generar un problema de salud pública.

2.2 De las pruebas aportadas con ocasión al recurso de reposición

El ente territorial aportó con su recurso de reposición los siguientes documentos:

- 2.2.1 Certificación expedida por la Secretaría de Planeación Municipal indicando que para la vigencia 2015 no existieron predios de estrato 6 para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
- 2.2.2. Copia del Decreto No. 024 de 1995.
- 2.2.3. Copia del Acuerdo No. 003 de 28 de febrero de 2014.
- 2.2.4. Copia del Acuerdo No. 026 de 28 de noviembre de 2016

Los anteriores documentos, con su valor legal se incorporan al expediente.

2.3 De las pruebas decretadas con ocasión al recurso de reposición

Teniendo en cuenta los argumentos del municipio, este Despacho profirió auto de pruebas No. 20174010001396 de 12 de mayo de 2017, mediante el cual ordenó lo siguiente:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECRETAR de oficio la siguiente prueba:

1. Oficiarse al Alcalde Municipal de Guayatá, a fin de que informe la razón por la cual no ha solicitado la reversión del formato de estratificación y coberturas, si afirma que lo reportado respecto del estrato 6 obedece a un error humano, máxime cuando se han reportado predios en ese estrato para las vigencias 2013 (1045 predios), 2014 (1077 predios) y 2015 (1077 predios).
2. Oficiarse al Personero Municipal de Guayatá, a fin de que certifique si, durante la vigencia 2015, existieron predios del estrato 6, en el Municipio de Guayatá – Boyacá.
3. Requerir a la Dirección General Territorial de esta Superintendencia, con el fin de que indique si, de la información reportada por el Municipio de Guayatá - Boyacá, frente a los predios del estrato 6, se puede inferir alguna inconsistencia de las que la DGT detecta en el reporte del REC, toda vez que el Alcalde de Guayatá manifiesta que, lo reportado respecto de ese estrato, obedeció a un error humano, puesto que en el municipio no existen predios en el estrato 6.

En respuesta, mediante comunicación radicada bajo el No. 20175290359242 de 17 de mayo de 2017, la Personería Municipal de Guayatá – Boyacá, manifestó que para la vigencia 2015 existía un predio en la zona rural del municipio que no es usuario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, pero que si tiene soluciones particulares para dicho servicios y aportó certificación del Secretario del Comité Permanente de Estratificación en la que da constancia de dicha situación.

Por su parte, mediante radicado No. 20178000042053 del 18 de mayo de 2017, la Dirección General Territorial, manifestó que una vez verificado el reporte de estratificación y coberturas de la vigencia 2015, se advirtieron errores en el reporte de información.

A su vez, mediante escrito radicado bajo el No. 20175290366112 de 18 de mayo de 2017, el Municipio manifestó que intentó reversar la información pero que por problemas en los validadores no pudo llevar a cabo la misma. Aportó documentos para demostrar sus afirmaciones.

Los anteriores documentos, con su valor legal se incorporan a expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Ahora bien, para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Superintendencia procederá a analizar el argumento único expuesto, de la siguiente manera:

- **Del argumento relacionado con el error en el reporte de información al SUI y la inexistencia de predios de estrato 6 - De su cumplimiento al requisito de “Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte**

solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya”, para la vigencia 2015.

Manifestó que la Superintendencia al expedir la resolución de descertificación hizo una lectura ligera y no tuvo en cuenta los formatos a reportar, ya que por error de “tipo humano” en el REC 1A2015 se digitaron predios en el estrato 6, cuando estos no existen, comoquiera que, desde su fundación, el ente territorial ha contado con problemas para la categorización en estratos superiores al 3, lo que se verifica en su Decreto de adopción de la estratificación. Indicó que esta situación debió ser advertida por la Superintendencia al proferir el acto administrativo impugnado, ya que se registró la presencia de un nuevo estrato y fueron registrados múltiples predios en este, lo cual debió ser verificado por esta Entidad y puesto en conocimiento del ente territorial.

Adujo que la Secretaría de Planeación Municipal ha certificado que para la vigencia a certificar no se contaba con el estrato 6 y en este sentido al fundamentarse en hechos irreales y en un error de tipo humano, la resolución de descertificación se encuentra viciada al ir en contra de la Constitución y la Ley y afecta el principio de la prevalencia del interés general, y el de proporcionalidad

Alegó que en vigencias anteriores el municipio fue certificado bajo circunstancias iguales y en consecuencia no existe unidad de materia en la resolución recurrida.

Adujo que mediante el Acuerdo No. 026 de 28 de noviembre de 2016 se regularon los factores de subsidio y contribución para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Afirmó que al ser un municipio de sexta categoría no cuenta con personal capacitado para reportar la información y por esto se presentan los errores de reporte como el presentado en el REC, no obstante, este pudo haber sido corregido si se lo hubiera advertido la Superintendencia.

Señaló que la decisión adoptada afecta la independencia en la administración de recursos y la prestación del servicio; señaló que dificulta el accionar administrativo, rompiendo el principio de economía y celeridad de las actuaciones, por lo que si se pondera el error presentado con la decisión adoptada, se desborda el control legal toda vez que se da prevalencia a una interpretación jurídica y no se presenta la posibilidad de corregir los errores presentados.

Manifestó que la Superintendencia debió buscar un medio alternativo para evitar la expedición de la resolución ya que ello conlleva a un mayor atraso en el municipio. Concluyó afirmando que esta Entidad se ha convertido en coercitiva y drástica, que en lugar de propender por un acceso a todos los habitantes a los servicios públicos, a conllevado a que estos se burocraticen más y que el servicio de agua potable sea no un derecho básico sino un lujo.

Arguyó que en el proceso de empalme, no recibió información clara de los problemas en los cuales se encontraba inmerso el municipio y que la Superintendencia castiga los proyectos del municipio en el sector de agua potable y saneamiento básico, que se podría generar un problema de salud pública.

En atención a lo manifestado por el recurrente, este Despacho se permite señalar lo siguiente:

La norma ha sido clara en regular los requisitos de certificación del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP – APSB). En efecto, el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015 establece, con relación al requisito que nos ocupa, lo siguiente:

“Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”

“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya” (...)

En este orden de ideas, es claro que si el ente territorial deseaba dar cumplimiento al referido requisito, debía reportar un Acuerdo de aprobación de porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2015, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011, lo que de suyo conlleva a entender que debía contemplar los porcentajes de subsidios y aporte solidarios de los predios que tiene el ente territorial en los diferentes estratos y usos, no obstante, tal y como se observa en la resolución de descertificación, el municipio reportó el Acuerdo vigente para el año 2015, pero en el mismo no estableció contribuciones para el estrato 6, los cuales conforme al reporte que hiciera el ente territorial en el reporte de estratificación y coberturas de la vigencia 2015, se encontraban identificados en el municipio.

En este orden de ideas, pese a que el recurrente manifiesta que existió un error de "tipo humano" en el REC 1A2015, al digitar predios en el estrato 6, cuando estos no existen, ello no puede ser desvirtuado por el Decreto de estratificación reportado, que data del año 1995. Ahora bien, es claro que el reporte hecho por el Municipio es oficial y en consideración a ello no es dable afirmar que la Superintendencia debía para el presente proceso dudar respecto a la veracidad del mismo y requerir al ente territorial cuando este último es quien reporta la información y máxime cuando dicho reporte era coincidente con el hecho por el municipio en vigencias anteriores.

A su vez tampoco es procedente que el municipio pretenda excusarse en no tener personal capacitado para reportar la información, toda vez que ello está en su resorte, máxime cuando los requisitos son exigibles a él como persona jurídica y en consecuencia debe responder ante su incumplimiento con independencia de las responsabilidades que se den al interior del mismo.

En este orden de ideas, el argumento objeto de análisis evidencia que el ente territorial pretende exculparse del incumplimiento en cuestión en su propia culpa, respecto a lo cual, la Corte Constitucional en Sentencia No. C-083-95, en relación con el principio NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINE ALLEGANS / PRINCIPIO "NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA"/PRINCIPIO DE LA BUENA FE, ha sostenido:

"... No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio, falta a la buena fé entendida como la ausencia de dolo, la conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue están amparados por éste.(...)"

Atendido lo anterior, no es válido que el recurrente reconozca la propia culpa con el fin de derivar un beneficio trasladando su responsabilidad de su incumplimiento a la administración, tal y como sucedió en el caso concreto, máxime cuando el proceso de certificación se adelanta al municipio y por ende quien este designe para reportar la información es de responsabilidad ende ente territorial, toda vez que es quien asume las consecuencias por los errores que se presenten y que sean atribuibles a él, como en el caso concreto.

A su vez, respecto a los argumentos del municipio relacionados con falta de información en el proceso de empalme, es de recordar que el proceso de certificación es de carácter institucional y por tanto es el ente territorial como tal, quien debe acreditar su cumplimiento a los requisitos y recibe las consecuencias de una certificación o descertificación, con independencia del funcionario que desempeñara el cargo de Alcalde Municipal en el mismo y de las responsabilidades que se den al interior del ente territorial.

Ahora bien, es de recodarle al recurrente, que en materia de certificación para el manejo de los recursos del S.G.P.- A.P.S.B., el Decreto 1077 de 2015 estableció los requisitos aplicables ara el proceso de certificación, para la vigencia de 2013 y los requisitos aplicables para la vigencia del año 2014 en adelante, tal y como se observa a continuación:

Aspecto (...)	Requisitos Vigencia 2013	Requisitos Vigencia 2014 y siguientes:
Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y servicios públicos domiciliarios de acueducto,	(i) Reporte al SUI del Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de	(i) Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la

alcantarillado y aseo	<p>2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya.</p> <p>En caso de no poder acreditar el requisito de la forma descrita, podrá:</p> <p>a) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o,</p> <p>b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar.</p> <p>La información del literal b) en los casos en que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tenga la misma, será enviada por dicha entidad a la SSPD por escrito en medio físico y magnético.</p>	<p>norma que lo modifique, complemente o sustituya.</p> <p>(ii) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios.</p> <p>La información del numeral (ii) será enviada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por escrito en medio físico y magnético.</p>
-----------------------	---	---

En este orden de ideas se tiene que para la vigencia anterior al 2014 para acreditar el aspecto *“Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”* se contaba con tres posibilidades a saber:

- Reporte al SUI del Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya.

ó

- Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar.

ó

- Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar (es último requisito fue el cumplido por el municipio y por ende fue certificado respecto a la vigencia 2013)

No obstante para la vigencia 2015 se reitera, que el mencionado aspecto solo puede ser satisfecho con el cumplimiento de ambos requisitos a saber, 1) Reporte al SUI del Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya y 2) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios, situación que NO se predicó en el asunto concreto para la vigencia 2015, tal y como se ha señalado en la resolución objeto de recurso y en el presente acto administrativo.

En este orden de ideas, en cada vigencia se examinan la acreditación que hace anualmente el municipio o distrito respecto a la totalidad de requisitos, lo que conlleva a que la decisión que se adopte en una vigencia anterior, no incida en la siguiente, en materia de lo establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015, al tratarse de circunstancias de tiempo, modo y lugar distintas.

En este mismo sentido, se debe precisar que el Despacho no puede pronunciarse de fondo respecto al Acuerdo No. 026 de 28 de noviembre de 2016 toda vez que no fue vigente para la vigencia 2015 que es la anualidad que nos ocupa.

Por otra parte, se debe señalar que no es cierto que la resolución proferida esté en contravía de la Constitución y la Ley o afecte el interés general, toda vez que según lo expuesto, es claro que el acto administrativo impugnado se profirió conforme a derecho, con base en las facultades establecidas y con aplicación estricta de las normas, por ende no se altera de forma alguna el principio de economía y celeridad de las actuaciones, por el contrario, se aplica la consecuencia establecida en la norma, en caso de incumplimiento.

En este orden de ideas, se le advierte que bajo ningún aspecto es válido que en el supuesto de confirmar la resolución de descertificación para la vigencia 2015, se pretendiera excusar del cumplimiento sus deberes o trasladar los efectos de ello a sus habitantes, quienes no pueden

verse afectados en la adecuada prestación de servicios públicos, toda vez que si el municipio presupuestó tener la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de dicha vigencia, debió cumplir íntegramente los requisitos establecidos en la norma o, de lo contrario, asumir las consecuencias que se originan por su incumplimiento sin causar perjuicio alguno a la comunidad.

Lo anterior, máxime cuando conforme al artículo 2.3.5.1.2.2.12 del Decreto 1077 de 2015, que establece *"los municipios y distritos que como resultado del proceso a que se refiere esta sección sean descertificados, no podrán administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico ni realizar nuevos compromisos con cargo a los mismos, desde la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo en que se decida la descertificación, expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios... los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico asignados al municipio o distrito descertificado, serán administrados por el departamento que asuma las competencias previstas en el artículo 50 de la Ley 1176 de 2007 o la norma que la modifique, complemente o sustituya,"* y dichas competencias *"podrán ser delegadas en los términos legales"*, se debe tener en cuenta que, de confirmarse la resolución objeto de recurso, el departamento administraría los recursos y que para ello **está obligado a hacerlo conforme lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007.**

En este entendido se reitera que en un supuesto de descertificación debe asumir las consecuencias de la misma **sin afectar la prestación de servicios públicos a sus usuarios o sus obligaciones como ente territorial.**

Ahora bien, el Despacho observa que el recurrente pretende poner en tela de juicio la misión y visión de esta Superintendencia y las actuaciones adelantadas por esta Entidad, respecto a lo cual se llama la atención del municipio, quien no puede utilizar afirmaciones como las hechas en su escrito de recurso de reposición, por el solo hecho de estar en desacuerdo con una decisión proferida por el Despacho o bajo el pretexto de hacer valer sus argumentos.

En este contexto, es preciso recordar al apoderado del municipio, que según lo dispuesto por los numerales 2 y 4 del artículo 78 del Código General del Proceso, entre los deberes de las partes y sus apoderados se encuentran los de:

"2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales.

(...)

4. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de este, a las partes y a los auxiliares de la justicia".

Por lo anterior, el apoderado **no** puede, so pretexto del ejercicio del derecho a la defensa de su representada, hacer imputaciones temerarias e irrespetuosas.

Sobre el punto particular del debido respeto que deben prodigar las partes a la administración de justicia, recuerda este Despacho al apoderado que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha sido reiterativa en señalar[1]:

"(...) El artículo 50 del Decreto 196 de 1971, cuyo texto reza:

'Artículo 50.- Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia, las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar comedidamente, por los medios competentes, las faltas cometidas por dichas personas.

El responsable de una de estas faltas incurrirá en amonestación, censura o suspensión".

(...) El citado precepto normativo protege el debido respeto que debe tenersele, entre otros, a la administración de justicia, representada por los órganos competentes establecidos por la Constitución y la ley, asegurando de esta forma, su respetabilidad por quienes intervienen en los diversos asuntos sometidos a su consideración.

(...) El abogado en el ejercicio de la función social de la profesión, a que se contrae el artículo 1º del decreto 196 de 1971, según el cual "La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia", asume responsabilidades que le exigen ser respetuoso con quienes intervienen en la realización de esa labor, pero especialmente con los funcionarios que representan al Estado en la aplicación de la ley a los casos particulares.

Dentro de los deberes del abogado que contempla el artículo 47 del Estatuto Forense se encuentran el de observar y exigir mesura; el de la seriedad y el respeto debidos en la interacción con los funcionarios judiciales, con los colaboradores y auxiliares de la justicia, con la contraparte y sus abogados y con las demás que intervengan en los asuntos de su profesión. Lo cual implica entre otros comportamientos, el uso en sus escritos de un lenguaje cauteloso y ceñido a la severidad jurídica, sin que puedan aceptarse válidamente las aseveraciones que impliquen acusaciones infundadas o temerarias o expresiones injuriosas en contra de los administradores de justicia y las demás partes dentro del proceso.

(...)

No puede desconocer esta Colegiatura que el ejercicio del derecho está al servicio tanto de la administración de justicia como de las personas que buscan la defensa de sus intereses dentro de cada uno de los procesos y que precisamente la controversia y el debate son la esencia de los compromisos adquiridos por los abogados, pero todo ello debe situarse dentro del marco del respeto por los demás y especialmente de los funcionarios que están investidos de la facultad de dirimir los conflictos, pues, como acertadamente lo refirió el a quo, actuar de manera diversa conlleva a la barbarie.

(...)

Las decisiones judiciales, aún con la posibilidad de que se dicten por fuera de los márgenes de la Constitución y de la Ley, deben ser acatadas y como admiten su censura, ésta debe estar precedida de la elegancia y los buenos modales, pues no se requiere calificar de tramposa o mezquina una decisión, para que el superior funcional de quien la emitió, logre comprender que la misma carece de la fundamentación necesaria o que está dictada con fundamento en pruebas irregularmente recogidas o aportadas, pues ello desdice del honor, el buen nombre y la reputación jurídica de quien, como la Fiscal 37 analizó los mencionados medios de convicción y les dio un valor sujeto a controversia.

(...)"

Por consiguiente, este Despacho no comparte lo señalado por el recurrente y lo requiere con el fin que en las actuaciones que adelante ante el Despacho se dirija con respeto a esta autoridad administrativa.

Ahora bien, conforme a lo señalado previamente, es claro que no se adoptó una postura restrictiva del derecho ni coercitiva toda vez que el incumplimiento del municipio, daba lugar a descertificar al ente territorial con independencia que este hubiera dado cumplimiento a los demás requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, toda vez que la norma exigió que se diera cumplimiento a TODOS los requisitos aplicables al ente territorial y no a algunos de estos.

De otro lado, con ocasión a los argumentos del ente territorial, quien en su recurso de reposición manifestó que no existió el estrato 6 en el municipio, este Despacho, con ánimo garantista, profirió auto de pruebas No. 20174010001396 de 12 de mayo de 2017, mediante el cual ordenó lo siguiente:

RESUELVE:**ARTÍCULO PRIMERO. - DECRETAR de oficio la siguiente prueba:**

1. Oficiarse al Alcalde Municipal de Guayatá, a fin de que informe la razón por la cual no ha solicitado la reversión del formato de estratificación y coberturas, si afirma que lo reportado respecto del estrato 6 obedece a un error humano, máxime cuando se han reportado predios en ese estrato para las vigencias 2013 (1045 predios), 2014 (1077 predios) y 2015 (1077 predios).
2. Oficiarse al Personero Municipal de Guayatá, a fin de que certifique si, durante la vigencia 2015, existieron predios del estrato 6, en el Municipio de Guayatá – Boyacá.
3. Requerir a la Dirección General Territorial de esta Superintendencia, con el fin de que indique si, de la información reportada por el Municipio de Guayatá - Boyacá, frente a los predios del estrato 6, se puede inferir alguna inconsistencia de las que la DGT detecta en el reporte del REC, toda vez que el Alcalde de Guayatá manifiesta que, lo reportado respecto de ese estrato, obedeció a un error humano, puesto que en el municipio no existen predios en el estrato 6.

En respuesta, mediante comunicación radicada bajo el No. 20175290359242 de 17 de mayo de 2017, la Personería Municipal de Guayatá – Boyacá, manifestó que para la vigencia 2015 existía un predio en la zona rural del municipio que no es usuario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, pero que sí tiene soluciones particulares para dicho servicios y aportó certificación del Secretario del Comité Permanente de Estratificación en la que da constancia de dicha situación.

Por su parte, mediante radicado No. 20178000042053 del 18 de mayo de 2017, la Dirección General Territorial, manifestó que una vez verificado el reporte de estratificación y coberturas de la vigencia 2015, se advirtieron errores en el reporte de información.

A su vez, mediante escrito radicado bajo el No. 20175290366112 de 18 de mayo de 2017, el Municipio manifestó que intentó reversar la información pero que por problemas en los validadores no pudo llevar a cabo la misma. Aportó documentos para demostrar sus afirmaciones.

Una vez analizado lo anterior, se advierte que en esta instancia no se encuentra plenamente demostrada la existencia de los predios reportados por el ente territorial para la vigencia 2015, toda vez que la Dirección General Territorial, advierte la inconsistencia en dicho reporte de información, por lo cual, la información obrante en el Reporte de Estratificación y Coberturas de la vigencia 2015, no será tenida en cuenta para evaluar el acuerdo de subsidios y contribuciones cargado oportunamente por el ente territorial.

En este orden de ideas, solo podría estar evidenciada la existencia de un solo predio en el estrato 6 de la zona rural, pero éste, conforme a los documentos aportados a la presente actuación administrativa, no es usuario de alguna prestadora de servicios públicos y tampoco se encuentra demostrado que reúna la calidad para ser sujeto de contribución, lo que conlleva a que el Despacho, para la vigencia 2015, no tenga como reprochable que el acuerdo reportado para dicha anualidad, no haya contemplado porcentajes de aporte solidario para dicho estrato.

Así las cosas se concluye que conforme a los hechos aludidos por el recurrente y las pruebas aportadas dentro del trámite de recurso de reposición, se tendrá por cumplido el requisito relacionado con el *"Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya"*, con el reporte del Acuerdo No. 06 de 2013, hecho por el ente territorial oportunamente.

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda al ente territorial que el acuerdo de subsidios y contribuciones, contemple los porcentajes todos los estratos y usos establecidos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, toda vez que estos pueden surgir en cualquier momento dentro del municipio y el no contemplar dicho porcentaje en el respectivo acuerdo podría conllevar a un incumplimiento al requisito en cuestión.

Conforme a lo anterior, se accederá a la solicitud de recovar la resolución de descertificación y en consecuencia se le certificará para el manejo de los recursos del SGP para la vigencia 2015.

Por lo expuesto, el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR la Resolución No. SSPD 20164010053725 del 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CERTIFICAR al Municipio de GUAYATÁ del Departamento de BOYACÁ, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, de la vigencia 2015.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al alcalde del Municipio de GUAYATÁ del Departamento de BOYACÁ, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno.

De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de BOYACÁ, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS

Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó Katherine Arenas - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Carlos Andrés Bernal Casas – Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Expediente No. 2016401351600860E